



219

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, quince (15) de noviembre de dos mil dos mil dieciocho (2018)

**MEDIO DE CONTROL:** Ejecutivo –medida cautelar-  
**DEMANDANTE:** Ana Cleotilde Roa Rodríguez  
**DEMANDADO:** Departamento de Boyacá  
**RADICACIÓN:** 15 001 33 33 002 2017 00024 00

El proceso ingresó al Despacho para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares elevada por el apoderado de la parte actora.

**ANTECEDENTES.**

- **De la medida cautelar.**

La cautela solicitada consiste en el embargo y secuestro de la tercera parte de las rentas brutas del Departamento de Boyacá de los siguientes recursos:

- a) Los tributarios tales como: los impuestos directos, llámese predial y comercio, circulación y tránsito.
- b) Los no tributarios, tales como: las tasas, contribuciones, sobretasas a la gasolina, complementarios, los de industria y comercio, pesas y medidas, espectáculos públicos etc.
- c) Las otras rentas tales como multas, arrendamientos de bienes del departamento de Boyacá, intereses moratorios sobre impuestos municipales, facturación de servicios administrativos, licencias certificación de documentos, ruptura de vías, etc.

- **Del trámite impartido**

Con el ánimo de determinar la tercera parte de la renta bruta embargable, señalada para la vigencia fiscal de 2018, se ofició a la Secretaría de Hacienda y al Tesorero General del Departamento de Boyacá, y para que, además, se informara en qué cuentas y entidades se encontraban consignados esos recursos; adicionalmente, se solicitó al Tesorero General, que certificara que cuentas bancarias podían ser objeto de embargo (fl. 141).

Con base en lo anterior, el Tesorero General del Departamento de Boyacá, mediante oficio fechado 15 de mayo de 2018 (fl. 145), manifestó que, actualmente, las cuentas del Departamento no pueden ser embargadas, en razón a que tales recursos se encuentran incorporados al presupuesto general del departamento.

De igual forma, en el auto fechado 26 de abril de 2018 (fl. 141), se ordenó oficiar a los bancos: Agrario de Colombia, Popular, Bancolombia, de Occidente, de Bogotá, BBVA, Caja Social, Davivienda, AV Villas y Colpatria, en la ciudad de Tunja, para que certificaran si las rentas o recursos depositados en las cuentas corrientes o de ahorros, títulos valores o CDTs de las que es titular el departamento de Boyacá, tienen o no carácter inembargables.

De este modo, se obtuvieron las siguientes respuestas de las entidades oficiadas:

ENTIDAD BANCARIA	NATURALEZA DE LOS RECURSOS
Banco Popular (fl. 167)	No la determinó –Solicitó el número de identificación del demandado–
Banco Caja Social (fls. 168 -169)	Allegó comunicación del Tesorero General del departamento donde consta que los recursos de una de las cuentas están incorporados al Presupuesto General del ente territorial

Banco Agrario de Colombia (fls. 170-183)	Recursos incorporados al presupuesto general del departamento de Boyacá
Banco Davivienda (fls 185)	No la determinó —señaló que no se encuentra entre sus atribuciones legales—
Banco de Occidente (fls. 186-196)	inembargables
Banco BBVA (fls. 197-199)	Inembargables
Banco de Bogotá (fls. 200-202)	Inembargables
Banco Colpatria (fl. 203-204)	inembargables
Banco AV Villas (fls. 205 -217)	Inembargables

## CONSIDERACIONES

Así las cosas, dado que la medida cautelar solicitada por el apoderado de la ejecutante consiste en el embargo y retención de los dineros que posea la entidad ejecutada en las entidades bancarias oficiadas, las cuales, según las certificaciones allegadas, en su mayoría, gozan del beneficio de la inembargabilidad, se debe abordar el estudio de las excepciones a este principio.

En relación con la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, el Decreto 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto, establece:

**“ARTÍCULO 19. Inembargabilidad.** *Reglamentado por el Decreto Nacional 1101 de 2007. Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.*

*No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.*

*Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4º del título XII de la Constitución Política.*

*Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (L. 38/89, art. 16; L. 179/94, arts. 6º, 55, inc. 3º).”*

De acuerdo a lo anterior, las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación tienen el carácter de inembargables, por tanto, corresponde al Despacho determinar si dichos recursos pueden ser objeto de medidas cautelares en el trámite del proceso ejecutivo, para lo cual en primera medida, debe aclararse que la Ley 1437 de 2011 no establece un procedimiento especial para los procesos ejecutivos conocidos por la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso, por remisión normativa del artículo 306 del CPACA, luego es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 594 del CGP:

**“ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES.** *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

1. *Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.*

(...)

16. *Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.*

**PARÁGRAFO.** *Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (...).”*

En este orden de ideas, el numeral 1 del artículo 594 del CGP, les dio el carácter de inembargables a los recursos económicos que integran el presupuesto general de las entidades territoriales, sin embargo, mediante este texto legal, también se incorpora a la ley formal el criterio desarrollado jurisprudencialmente, consistente en que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta, ya que admite excepciones derivadas del mismo ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 2013<sup>1</sup>, al estudiar, entre otras, la norma transcrita señaló:

*“.. El artículo 63 de la Constitución dispone que “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”*

*A la luz del anterior precepto debe entenderse que además de los bienes señalados expresamente en éste, el **Constituyente le otorgó al legislador la facultad para determinar, entre otros, los bienes que tienen naturaleza de inembargables, del cual también se deriva el sustento constitucional del principio de inembargabilidad presupuestal.***

*Por su parte, la Corte Constitucional, al fijar el contenido y alcance del artículo 63 sobre el tema en discusión, ha sostenido que **el principio de inembargabilidad es una garantía que se hace necesario preservar y defender, con el fin de proteger los recursos financieros del Estado, en particular, los destinados a cubrir las necesidades esenciales de la población. Esto, por cuanto si se permitiera el embargo de todos los recursos y bienes públicos (i) el Estado se expondría a una parálisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocería el principio de la prevalencia del interés general frente al particular, el artículo 1 y el preámbulo de la Carta Superior***<sup>2</sup>.

*Sin embargo, **contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales**, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:*

- (i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas*<sup>3</sup>.
- (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos*<sup>4</sup>.
- (iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible*<sup>5</sup>.
- (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)***<sup>6</sup>

*Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexecutable de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos*<sup>7</sup>...” (Negritas fuera del texto original)

<sup>1</sup> Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALIUB

<sup>2</sup> Corte Constitucional, sentencia C-546 de 1992. Magistrados Ponentes: Ciro Angarita Baron y Alejandro Martinez Caballero.

<sup>3</sup> C-546 de 1992

<sup>4</sup> En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Preciso que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

<sup>5</sup> La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

<sup>6</sup> C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño

<sup>7</sup> La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107,

Entonces, el Máximo Tribunal Constitucional estableció la importancia del principio de inembargabilidad de los recursos públicos, en la medida que estos tienen como fin garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y permitir su embargo indiscriminado resultaría el perjuicio del interés general; no obstante, jurisprudencialmente se han determinado excepciones a tal inembargabilidad cuando esta choca con otros valores y principios superiores, tema objeto de un estudio más profundo en la sentencia C 1154 de 2008, donde la Corte explicó ampliamente el fundamento de cada una de ellas, al respecto, en resumen, encontramos:

- La primera excepción tiene que ver con **la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral** con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y obedece a prevalencia del derecho de los trabajadores a la efectividad del pago de su salario, toda vez que el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto, criterio que apunta a la realización efectiva de derechos laborales reconocidos en sentencia judicial o, en actos administrativos que así lo dispongan en forma inequívoca.
- La segunda regla de excepción, se relaciona con **el pago de sentencias judiciales** para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, *“bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos” (Subrayas del Juzgado).*
- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, **se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible**, pues los créditos creados por el Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley, tienen tanto valor como los reconocidos a través de sentencias.

Ahora bien, en reciente pronunciamiento, el Tribunal Administrativo de Boyacá<sup>8</sup>, con ponencia del Honorable magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, señaló:

*“Entonces, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, y la **excepción** la constituye la procedencia de la medida cautelar cuando se trate del pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las entidades públicas, particularmente, en caso de **acreencias laborales**, los cuales gozan de una protección especial, constitucional, sin que para la procedencia de esa medida deba considerarse que el cobro corresponde a capital, indexación o intereses moratorios porque estos tres aspectos se integran en un todo en el título ejecutivo.*

*Por ende, negar el decreto de la medida cautelar con el argumento de la inembargabilidad de los recursos que están incorporados en el presupuesto General de la Nación, genera un desmedro al patrimonio del demandante; además, no puede desconocerse que el hecho de que al prohibir el embargo de ciertos bienes se hace ilusorio el derecho a reclamar el pago que se encuentra contenido en un título ejecutivo. (...)”*

En conclusión, en eventos relacionados con la satisfacción de créditos u obligaciones de carácter laboral, y en particular, aquellos reconocidos en fallos judiciales, actos

---

C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.

<sup>8</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho N° 2. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Arciniegas Triana, auto de 21 de septiembre de 2018, radicación: 15001 3333 001 2015-00146 03.

administrativos y cualquier otro título ejecutivo debidamente constituido, el principio general de inembargabilidad de los recursos públicos pierde su supremacía, pues su afectación es necesaria para efectivizar otros principios de orden fundamental como la igualdad, la dignidad humana y el derecho al trabajo, cuya garantía también corre por cuenta del Estado.

### CASO CONCRETO.

El apoderado de la parte ejecutante solicitó embargo la tercera parte de las rentas brutas del Departamento de Boyacá, para hacer efectivo del pago de la obligación consistente en el saldo que por concepto de intereses moratorios le adeuda este ente territorial, con ocasión del cumplimiento de la sentencia proferida por este Juzgado el 30 de septiembre de 2011, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 26 de febrero de 2013, mediante las cuales se condenó al demandado, entre otras cosas, a pagar la señora Ana Clotilde Roa Rodríguez el valor equivalente las prestaciones sociales ordinarias de todo docente.

Ahora bien, en pronunciamientos anteriores, esta Judicatura dio aplicación al pronunciamiento efectuado por el Tribunal Administrativo de Boyacá<sup>9</sup>, donde se argumentó que el cobro de los intereses moratorios no se encuentra dentro de las excepciones a la inembargabilidad a los recursos públicos fijadas por la Corte Constitucional, porque no buscan satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, pues no hacen parte de la obligación principal, sino que tienen un carácter indemnizatorio y, en consecuencia, se abstuvo de decretar medidas como la que ahora nos ocupa.

No obstante, con auto de 25 de junio de 2018<sup>10</sup>, el Superior revaluó su posición e indicó que *“la inembargabilidad de los recursos del Estado debe ceder en el evento en que vencidos los términos previstos en la ley para que por parte de las entidades, no se efectúe el pago de las acreencias dinerarias de origen laboral contenidas en actos administrativos y sentencias judiciales”* y al resolver el caso concreto, manifestó que a la obligación que se pretendía ejecutar se le dio un cumplimiento parcial, estado pendiente el pago de los intereses moratorios configurándose *“uno de los supuestos en los que el principio de inembargabilidad, sufre una excepción, esto es, que se pretenda el cobro ejecutivo de una sentencia proferida por esta jurisdicción, razón por la cual resulta procedente decretar la medida cautelar solicitada por la parte demandante”*.

Bajo este contexto, y en aplicación del análisis normativo y jurisprudencial expuesto anteriormente, se logra establecer que la situación particular de la parte ejecutante se encuadra dentro de las excepciones a la regla general de inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la causa que llevó a la señora Ana Cleotilde Rosa Rodríguez a iniciar la presente acción ejecutiva en contra del Departamento de Boyacá, ostenta una doble connotación, **pues es una obligación de carácter laboral —pago de intereses moratorios fruto de prestaciones sociales— derivada de una sentencia proferida por el este Juzgado, confirmada por Superior Funcional y debidamente ejecutoriada.**

De igual manera, el Despacho al considerar que en el presente caso ya se libró mandamiento de pago (fls. 60-63), se ordenó seguir adelante con la ejecución (fls. 278-279), y fue aprobada la liquidación del crédito (fls. 122-124), encuentra que no tiene sentido negar la solicitud de medidas cautelares elevada por la parte ejecutante, máxime cuando este es el único instrumento procesal con que cuenta para garantizar el cumplimiento de la obligación que persigue.

En este orden de ideas, ahora el Despacho debe determinar las condiciones del embargo a decretar, para el efecto se encuentra numeral del artículo 594 del CGP establece que, en general, los bienes de las entidades territoriales son inembargables, pero el numeral

<sup>9</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 6, auto de 31 de octubre de 2017, Radicado 15001333301220160004501, Magistrado Ponente: Oscar Alfonso Granados Naranjo.

<sup>10</sup> Tribunal Administrativo De Boyacá, sala de decisión no. 5, magistrado ponente Oscar Alfonso Granados Naranjo, expediente: 15001-33-33-011-2015-00105-01.

16 de la misma norma señala que esta prohibición recae únicamente sobre las dos terceras partes de las rentas brutas, siendo factible interpretar que existe una tercera parte pasible de embargo. El Tribunal Administrativo de Boyacá se ocupó ampliamente del estudio de esta contradicción y, al respecto, concluyó:

*“... el único método que permitiría entender armónicamente ambas disposiciones sin privar a alguna de ellas de un efecto útil es el sistemático, que implicaría entender que **aun cuando las rentas de las entidades territoriales son inembargables, únicamente lo son hasta sus dos terceras partes y descontando los costos de su recaudo para obtener su monto bruto.***

(...)

*Esta conclusión tiene una consecuencia práctica, consistente en que las entidades territoriales no pueden negarse al decreto de medidas cautelares de embargo de rentas o recursos incorporados a los presupuestos respectivos con el simple argumento de su inembargabilidad total, sino que es necesario que acrediten que la sumatoria de los aludidos embargos supera la tercera parte de la renta bruta, que debe calcularse anualmente como lo prescribe el artículo 5° del Decreto No. 3040 de 1982. Sin embargo, eso no obsta para que sea procedente el decreto de embargos que superen ese tope siempre y cuando la acreencia se enmarque en alguna de las excepciones delimitadas por la jurisprudencia (acreencias laborales, sentencias y conciliaciones y otros títulos emanados del Estado) y no afecten recursos que gozan de reglas especiales de inembargabilidad<sup>11,12</sup>*

En la providencia en cita, también se señaló que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto N° 3440 de 1982, *“La ejecución de las medidas cautelares decretadas sobre las rentas de las entidades territoriales se hará efectiva sobre el porcentaje de la renta bruta permitido por la ley, **previa su determinación por la correspondiente Secretaría de Hacienda, la cual deberá efectuarse anualmente dentro de los treinta (30) días siguiente a la expiración de cada vigencia fiscal,*** de manera que no es aceptable que la entidad ejecutada se justifique señalando que, a voces del artículo 594 *ibídem*, todas las cuentas del departamento son inembargables.

Por ello, al no acreditarse cuál es la tercera parte de la renta bruta embargable y mucho menos si se encuentra agotada, la orden de embargo se considera procedente. Además, en gracia de discusión, aun si el departamento hubiese acreditado la inexistencia actual de rentas embargables, igualmente, sería procedente ordenar la cautela, debido a que, como ya se dijo, el asunto se enmarca dentro de las excepciones contempladas por la jurisprudencia al principio de inembargabilidad.

Por tanto, el Despacho decretará el embargo y retención de dineros depositados en la cuenta corriente N° 2600100146-0 Tesoral fondos comunes, del Banco Colpatria, de la que es titular el **Departamento de Boyacá – NIT 891.800.498-1**, en favor de la demandante **Ana Cleotilde Roa Rodríguez**, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.369.250; para efecto de materialización de la medida, se atenderá a lo establecido por el artículo 593 del CGP en su numeral 10, por lo que se dispondrá que por Secretaría se oficie al gerente de la entidad bancaria a fin de que se sirva retener los dineros allí depositados, en la cuantía que se señalara a continuación y ponerlos a disposición de este juzgado en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, dentro de los tres (3) días siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación.

Frente al límite del monto del embargo, se deberá aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 599 del CGP, norma especial para efectos de medidas cautelares en proceso ejecutivos, en el sentido de limitar el monto del embargo *“a lo necesario”*, para el efecto, deberá tenerse en cuenta que la suma aprobada como liquidación del crédito, correspondiente al valor de intereses adeudados a la ejecutante, fue de \$2.965.489 (fls. 132-133), que junto con las costas y gastos reconocidos en esta ejecución —\$153.792— asciende a \$3.119.281 a esa fecha, por lo que el Despacho, previendo rubros adicionales

<sup>11</sup> Ver, por ejemplo: TAB. 24 nov. 2017, el 50013333006201400187-01. J. Fernández.

<sup>12</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 4, MP José Ascención Fernández Osorio, auto de 09 de octubre de 2018, expediente N° 150013333005201500110-01

que puedan generarse hasta el momento en que se produzca el pago efectivo, limitará la medida a **tres millones trescientos mil pesos (\$3.300.00)**.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja,

**RESUELVE**

**PRIMERO.-** Decretar el embargo y retención de los dineros que se encuentren en la cuenta corriente N° 2600100146-0 del Banco Colpatria, de la que es titular el departamento de Boyacá, con NIT 891.800.498-1.

**SEGUNDO.-** Limitar el embargo a la suma de **tres millones trescientos mil pesos (\$3.300.00)**.

**TERCERO.-** Por Secretaria, **oficiar** al Gerente del Banco Colpatria, a fin de que se sirva retener los dineros depositados en la cuenta corriente N° 2600100146-0 de que es titular el departamento de Boyacá, con NIT 891.800.498-1, hasta por el valor de **tres millones trescientos mil pesos (\$3.300.00)**, y ponerlos a disposición del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja, depositándolos dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación en la cuenta de depósitos judiciales N° 150012045004 del Banco Agrario de Colombia, en favor de la demandante **Ana Cleotilde Roa Rodríguez**, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.369.250.

En los oficios que se libren se deberá advertir que la inobservancia de la orden impartida hará incurrir en multas sucesivas de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, según prescripción del parágrafo 2 del artículo 593 del CGP.

De igual manera, se anexará copia de la presente providencia, a fin de dar a conocer los fundamentos legales de la medida cautelar ordenada por el Despacho, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 594 *ibidem*.

**CUARTO:** Por Secretaria, **dar** cumplimiento inmediato a ésta medida antes de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 *ejusdem*.

**Notifíquese y cúmplase.**

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
 Juez

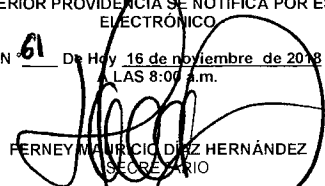
<sup>13</sup> CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL  
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRÓNICO

N <sup>61</sup> De Hoy 16 de noviembre de 2018  
LAS 8:00 a.m.

  
**FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ**  
 SECRETARIO

<sup>13</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 16 de noviembre de 2018 en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co). Ferney Mauricio Díaz Hernández Secretario